

Fecha Sanción 11 Abril 1997
Publicado en Boletín Oficial B.O.N° 55/97 - PAG. 1419/21
Extracto DECLARASE EL ESTADO DE DISOLUCION DE LA SOCIEDAD MINERA
CATAMARCA DE ECONOMIA MIXTA (SOMICA-DEM).-

VISTO:

El Expte. "E" N° 6551/92, caratulado: "Empresa SO.MI.CA. DEM s/procede a la privatización de la capacitación estatal en la empresa".

CONSIDERANDO:

Que la creación de la persona jurídica SO.MI.CA. DEM tuvo por objeto promover el desarrollo de la minería catamarqueña.
Que el Decreto N° 364/89 de fecha 28 de febrero de 1989 determinó la cesión de la zona de reserva minera "Cerro Atajo" a la empresa SO.MI.CA.DEM.
Que la Res. Interna N° 029/89 de la Dirección de Minería de fecha 28 de Febrero de 1989 en la que se estableció el valor de la zona de investigación geológica minera "Cerro Atajo" se realizó sobre la base de una sola mina, que tenía valuación previa realizada (Noviembre 1985-Diciembre 1986).
Que el mismo 28 de Febrero de 1989, el Poder Ejecutivo mediante Decreto P y D N° 366/89 ratificó en todos sus términos la Res. Int. N° 029/89 de la Dirección de Minería.
Que también el 28 de Febrero de 1989, mediante Esc. Púb. N° 16, la Escribana Mayor de Gobierno, Nelly Zita Brizuela de Saadi, con la comparencia del Ing. Oscar Adrian Gómez, en su carácter de Organizador responsable (Dcto. N° 36/88) y los particulares Sres. Guillermo Sebastián Palacio y Víctor Cofano, constituyeron SO.MI.CA.DEM con un capital social de A 10.000.000.
Que el Estado Provincial suscribió el 51% de las acciones, mediante el aporte en especie de la Zona de Investigación Geológica Minera Cerro Atajo, por un valor de A 5.100.000 y reservándose un crédito por el saldo restante de A 142.768, en atención la diferencia resultante.
Que el aporte privado se realizó sobre la valuación irregular de una porción del bien que se transfería, es decir el valor de la mina "El Carmen", lo que constituye un enriquecimiento sin causa a favor de la parte privada.
Que debe determinarse la existencia de mala fe, en relación al enriquecimiento sin causa a favor del patrimonio de la parte privada, para merituar el proceder a seguir con respecto a los frutos.
Que el aporte Estatal se realizó sin que se publicare en el Boletín Oficial el Decreto N° 364/89.
Que el Art. 11° del Código de Minería establece que las minas se rigen por los mismos principios que la propiedad común.
Que el Art. 12° del Código de Minería establece que las minas son inmuebles.
Que la Constitución Provincial en su Art. 110° inc.5) e inc.13) establece la necesidad de la intervención del Poder Legislativo en los casos que se disponga la cesión de bienes de la Provincia.
Que correspondía expresa autorización por Ley para disponer la transmisión de bienes integrantes del patrimonio provincial, conforme al Art. 110° de la Constitución Provincial.
Que el Art. 185° de la Constitución Provincial sanciona con la nulidad a las obligaciones contraídas sin respetar las leyes.
Que el aporte efectuado por el Poder Ejecutivo es inválido, porque no era de su competencia determinar la transferencia de un área de reserva minera, bien integrante del patrimonio provincial.
Que el Decreto N° 364/89 es un acto administrativo incompleto y por ello carece de ejecutoriedad.
Que al carecer de ejecutoriedad el decreto N° 364/89 los actos que lo tienen a este por fundamento devienen nulos.
Que SO.MI.CA.DEM, haciendo uso de la exclusividad conferida al Estado por el Cap. XVIII del Cód. de Min. realizó trabajos de exploración y cateo en el Sector Atajo, Dpto. Andalgalá.
Que el giro empresario de SO.MI.CA.DEM produjo distintos actos destinados a la negociación de los minerales existentes.
Que los contratos de exploración con derecho a explotación concertados con la Empresa Víctor M. Contreras y Cia. S.A.(VMC) y su controlada Minera Andina S.A. tienen por fundamento este aporte realizado por el Poder Ejecutivo mediante un decreto que no fue homologado por la autoridad competente, el Poder Legislativo Provincial.
Que del informe del Presidente de SO.MI.CA.DEM de fecha 19 de Setiembre de 1996 surge que los contratos no fueron cumplidos.
Que no obstante lo expuesto los contratos no fueron rescindidos por culpa de VMCYMA.
Que los órganos sociales de SO.MI.CA.DEM registran una inactividad absoluta por un lapso de varios años y actualmente continúan en la misma situación.
Que el Directorio no se encuentra debidamente constituido.
Que las Asambleas ordinarias y extraordinarias no se realizan desde hace años.
Que el pasivo supera con creces al activo corriente, lo que representa pérdida del capital social.

Que transcurridos siete años desde su constitución no se ha logrado la consecución del objeto social.

Que la transferencia aparente del patrimonio provincial, en contravención a la Constitución Provincial, ha dado lugar a la inscripción en el Registro de Sociedades y en el Registro de Minas como aporte en especie para constituir el patrimonio social, por lo que corresponde disponer el procedimiento para lograr la concordancia entre la realidad registral y la extraregistral con el fin de preservar la armonía entre la realidad jurídica y la realidad libraria.

Que el Art. 94° de la LSC establece que cuando se registran las causales enunciadas se debe poner fin a la vida activa de la sociedad y encauzarla en el proceso de liquidación.

Que las circunstancias apuntadas hacen certeramente concluir que SO.MI.CA.DEM tiene incapacidad para lograr el objetivo social.

Que la pérdida del capital social y el pesado nivel de endeudamiento que padece la sociedad impide que esta pueda cumplir mínimamente con el objeto social y por ende subsume a la persona jurídica en inactividad total.

Que la inactividad de la sociedad, pase a no estar expresamente comprendida en el Art. 94° de la Ley N° 19.550 es una causal de disolución unánimemente aceptada por la doctrina y jurisprudencia en la materia.

Que la inactividad societaria, de los socios y de los administradores, en el tiempo transcurrido justifican la disolución de la sociedad.

Que en el marco de las Leyes N° 4639 y N° 4803, el Poder Ejecutivo Provincial se encuentra habilitado para declarar el estado de disolución de SO.MI.CA.DEM mediante el dictado de Decreto correspondiente.

Que esta decisión de disolución es conforme también a las disposiciones del inc.1) del Art. 94° de la Ley N° 19.550 que provee que la sociedad se disuelve por decisión de los socios, que expresan la mayoría de la voluntad social.

Que conforme al Art. 37° de la Ley N° 4349 el Poder Ejecutivo es quien designa la autoridad administrativa que tendrá a su cargo la liquidación de SO.MI.CA.DEM, autoridad que deberá cumplir con las obligaciones y procedimientos establecidos en la Sección XIII del Capítulo I de la Ley N° 19.550.

Que el liquidador continúa la personalidad jurídica de la Sociedad (Art. 101° Ley N° 19.550).

Que éste deberá realizar todos los actos conducentes a determinar y mantener el patrimonio social y encauzarlo en el proceso de liquidación.

Que la retribución del Sr. Liquidador y los gastos conexos por la situación de hecho expuestas precedentemente deberán ser afrontados por el Estado Provincial, porque la culminación de este estado de incertidumbre beneficia al interés social, criterio que se sustenta también en la Ley Provincial de Reforma del Estado Provincial N° 4639 y N° 4803.

Que el aporte que significa el pago de la retribución del liquidador y los gastos conexos que su actividad demande deberán ser considerados como créditos a favor del socio estatal.

Que Asesoría General de Gobierno emitió Dictamen AGG N° 53/97 de fecha 26 de Febrero del corriente año, aconsejando la liquidación de SO.MI.CA.DEM.

Que el Poder Ejecutivo es competente para dictar el presente Instrumento Legal en base a lo dispuesto por el Art. 149° de la Constitución Provincial; Art. 37° de la Ley N° 4349 y Arts. 1° y 2° de la Ley N° 4639 Reforma del Estado;

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA EN ACUERDO DE MINISTROS

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Declárase inejecutivo el Decreto N° 364/89, conforme Arts. 110° y 185° de la Constitución Provincial y Art. 29° de la Ley N° 3559.

ARTICULO 2°.- Declárase el estado de disolución a la Sociedad Minera Catamarca de Economía Mixta (SO.MI.CA.DEM), conforme a lo establecido por la Ley N° 4349 (mod. Ley N° 4509) y Art. 94° de la Ley N° 19.550.

ARTICULO 3°.- Designase Liquidador de la Sociedad Minera Catamarca de Economía Mixta al Dr. Segio Emilio ARIAS GIBERT, DNI N° 16.193.346, conforme a lo establecido por el Art. 37° de la Ley N° 4349 (mod. Ley N° 4509) con expresas atribuciones para administrar y conservar el patrimonio social, realizar el activo y cancelar el pasivo, requerir a los administradores anteriores la rendición de cuentas, rescindir los contratos de tracto sucesivo que correspondieren y ejercer las facultades que confiere el Art. 105° de la Ley N° 19.550.

ARTICULO 4°.- Los gastos que requiera el proceso de liquidación se afrontarán con las partidas presupuestarias correspondientes del Ministerio de Producción y Desarrollo.

ARTICULO 5°.- La remuneración de Liquidador será equivalente a la que perciba el funcionario con rango de Subsecretario de Estado.

ARTICULO 6°.- Instrúyese a la Fiscalía de Estado la iniciación de las acciones legales para subsanar las inscripciones registrales de las minas comprendidas en la zona de reserva y las que resulten de las investigaciones que realice el liquidador.

ARTICULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y Archívese.

ARNOLDO ANIBAL CASTILLO

Gobernador de Catamarca

Dr. RAUL FRANCISCO POLICHE

Ministro de Gobierno y Justicia

CPN. RAUL ESTEBAN GINE

Ministro de Hacienda y Finanzas

Ing. CARLOS VICTOR PINGITORE

Ministro de Producción y Desarrollo

Dr. ARNOLDO VICTOR CASTILLO

Ministro de Salud y Acción Social

Lic. LUIS ADOLFO VARELA DALLA LASTA

Ministro de Cultura y Educación